

Año: 2020

Expediente: 13637/LXXV

# H. Congreso del Estado de Nuevo León



## LXXV Legislatura

**PROMOVENTE:** C. DIP. BEATRIZ DE LOS SANTOS ELIZONDO, INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL DE LA LXXV LEGISLATURA

**ASUNTO RELACIONADO:** MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA DE REFORMA AL ARTÍCULO 1126 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

**INICIADO EN SESIÓN:** 05 de agosto del 2020

**SE TURNÓ A LA (S) COMISIÓN (ES):** Legislación

**Mtra. Armida Serrato Flores**

**Oficial Mayor**



H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN  
LXXV LEGISLATURA  
MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL

**morena**  
La esperanza de México



C. DIP. JUAN CARLOS RUIZ GARCÍA.

Presidente del H. Congreso del Estado de Nuevo León.

**P R E S E N T E.-**

La C. Diputada **Beatriz De Los Santos Elizondo**, integrante del Grupo Legislativo del partido **MORENA**, perteneciente a la LXXV Legislatura del Honorable Congreso del Estado, de conformidad con lo establecido en los artículos 68 y 69 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, así como lo dispuesto en lo establecido por los numerales 102, 103 y 104 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, ocurro a promover **iniciativa de reforma por al artículo 1126 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo León.**

Lo anterior al tenor de la siguiente:

### **EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.**

El artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece textualmente lo siguiente:

*Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.*

*Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.*

*Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará.*

*Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.*



*Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.*

*Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.*

*Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.*

*Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento.*

*En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.*

*Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.*

*El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.*

*Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural.*

*Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia.*

Este artículo constitucional reconoce, entre otros, el Derecho Humano al libre desarrollo de la personalidad, que tiene diversas ascepciones, pero en este caso nos centraremos en la interpretación que ya le dio el máximo tribunal del País dentro de la figura jurídica que más ha venido a la alza en los últimos años , tanto en el País como en el Estado: El Divorcio.



El pasado 10 de julio de 2015, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió la contradicción de tesis 73/2014, en donde interpretó y resolvió los alcances que tiene el el Derecho Humano en comento, dentro de la figura jurídica del divorcio, misma ejecutoria que a su vez creó y/o trajo consigo la jurisprudencia por contradicción 1ª/J. 28/2015, la cual a continuación se cita a literalidad:

Época: Décima Época  
Registro: 2009591  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 20, Julio de 2015, Tomo I  
Materia(s): Constitucional, Civil  
Tesis: 1a./J. 28/2015 (10a.)  
Página: 570

**DIVORCIO NECESARIO. EL RÉGIMEN DE DISOLUCIÓN DEL MATRIMONIO QUE EXIGE LA ACREDITACIÓN DE CAUSALES, VULNERA EL DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD (CÓDIGOS DE MORELOS, VERACRUZ Y LEGISLACIONES ANÁLOGAS).**

*El libre desarrollo de la personalidad constituye la expresión jurídica del principio liberal de "autonomía de la persona", de acuerdo con el cual al ser valiosa en sí misma la libre elección individual de planes de vida, el Estado tiene prohibido interferir en la elección de éstos, debiéndose limitar a diseñar instituciones que faciliten la persecución individual de esos planes de vida y la satisfacción de los ideales de virtud que cada uno elija, así como a impedir la interferencia de otras personas en su persecución. En el ordenamiento mexicano, el libre desarrollo de la personalidad es un derecho fundamental que permite a los individuos elegir y materializar los planes de vida que estimen convenientes, cuyos límites externos son exclusivamente el orden público y los derechos de terceros. De acuerdo con lo anterior, el régimen de disolución del matrimonio contemplado en las legislaciones de Morelos y Veracruz (y ordenamientos análogos), que exige la acreditación de causales cuando no existe mutuo consentimiento de los contrayentes, incide en el contenido prima facie del derecho al libre desarrollo de la personalidad. En este sentido, se trata de una medida legislativa que restringe injustificadamente ese derecho fundamental, toda vez que no resulta idónea para perseguir ninguno de los límites que imponen los derechos de terceros y de orden público. En consecuencia, los artículos 175 del Código Familiar para el Estado de Morelos y 141 del Código Civil para el Estado de Veracruz, en los cuales se establecen las causales que hay que acreditar para que pueda decretarse la disolución del matrimonio cuando no existe mutuo consentimiento de los cónyuges, son inconstitucionales. De acuerdo con lo anterior, los jueces de esas entidades federativas no pueden condicionar el otorgamiento del divorcio a la prueba de alguna causal, de tal manera que para decretar la disolución del vínculo matrimonial basta con que uno de los cónyuges lo solicite sin necesidad de expresar motivo alguno. No obstante, el hecho de que en esos casos se decrete el divorcio sin la existencia de cónyuge culpable no*



*implica desconocer la necesidad de resolver las cuestiones familiares relacionadas con la disolución del matrimonio, como pudieran ser la guarda y custodia de los hijos, el régimen de convivencias con el padre no custodio, los alimentos o alguna otra cuestión semejante.*

*Contradicción de tesis 73/2014. Suscitada entre el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, en apoyo del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito. 25 de febrero de 2015. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Mayoría de tres votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto concurrente y Olga Sánchez Cordero de García Villegas, en cuanto al fondo. Disidentes: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien formuló voto particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Bárcena Zubieta.*

*Tesis y/o criterios contendientes:*

*El Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 32/2013, dio origen a la tesis aislada número XVIII.4o.15 C (10a.), de rubro: "DIVORCIO NECESARIO. DEBE DECRETARSE AUN CUANDO NO QUEDEN DEMOSTRADAS LAS CAUSALES INVOCADAS, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA DIGNIDAD HUMANA.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 17 de enero del 2014 a las 13:02 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 2, Tomo IV, enero de 2014, página 3051, con número de registro digital 2005339, y el juicio de amparo directo 339/2012, que dio origen a la tesis aislada número XVIII.4o.10 C (10a.), de rubro: "DIVORCIO. EL ARTÍCULO 175 DEL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, AL EXIGIR LA DEMOSTRACIÓN DE DETERMINADA CAUSA PARA LOGRAR LA DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL, CUANDO NO EXISTE CONSENTIMIENTO MUTUO, ES INCONSTITUCIONAL AL RESTRINGIR EL DERECHO AL DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD HUMANA.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 17 de enero del 2014 a las 13:02 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 2, Tomo IV, enero de 2014, página 3050, con número de registro digital 2005338; y el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz, en apoyo del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 1020/2013 (cuaderno auxiliar 44/2014), en el cual sostuvo que, conforme a lo establecido en la Norma Fundamental, en los juicios del orden civil la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, lo que por sí mismo excluye la posibilidad de resolver asuntos en conciencia; que el artículo 4o. de ese mismo ordenamiento establece el interés superior de la ley en preservar la unidad familiar, lo que conlleva a establecer, conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que si el matrimonio es una de las bases de la familia, por ende, constituye una figura jurídica en comento implica, aunque de naturaleza sui géneris, un contrato civil que no puede disolverse unilateralmente, sino que el vínculo jurídico que se crea con su celebración sólo puede desaparecer cuando se surtan los supuestos establecidos expresamente en la ley.*

*Tesis de jurisprudencia 28/2015 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha quince de abril de dos mil quince.*



*Esta tesis se publicó el viernes 10 de julio de 2015 a las 10:05 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 13 de julio de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.*

En dicha jurisprudencia la Primera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, resolvió que el libre desarrollo de la personalidad constituye la expresión jurídica del principio liberal de la autonomía de la persona, en el cual el Estado tiene prohibido interferir, únicamente debiendo diseñar instituciones que faciliten la persecución de esos planes de vida y satisfacción de los ideales.

Que el divorcio que exigía acreditar causales, lástima y/o restringe injustificadamente el derecho al libre desarrollo de la personalidad de cada ciudadano que quiera disolver su vínculo matrimonial, al ser que no resultaba ser un mecanismo idóneo para perseguir ninguno de los límites que imponen en los derechos de terceros.

Como consecuencia, dicho criterio jurisprudencial trajo consigo que el propio Poder Judicial del Estado de Nuevo León, a través de diversos funcionarios y/o servidores públicos presentaron una iniciativa de reforma, entre otras legislaciones, al Código Civil y al Código de Procedimientos Civiles, ambos del Estado de Nuevo León, ello a fin de regular expresamente el divorcio incausado, cuya intención según se desprende de la respectiva exposición de motivos era la siguiente:

*"(...)La adición del divorcio incausado en nuestra legislación favorecerá la relación de los hijos con sus padres, así mismo, otorgará celeridad y simplificación del divorcio al acotar el plazo y procedimiento para resolver. Por otra parte se evitarían largos y costosos procesos, en perjuicio de la economía familiar, y se generará ahorro al recortar los tiempos del procedimiento judicial (...)*

*(...)por otra parte determinamos que ofrecería gran comodidad, ya que reduciría notoriamente la cantidad de desplazamientos y trámites, otorgando un ahorro de tiempo. Desentrañamos que pareciera que las causales de divorcio se empeñan en mantener a toda costa un vínculo jurídico, no solo a pesar de la ausencia de la voluntad de los interesados para mantenerlo, sino del riesgo, e incluso de la consumación de gravísimas*



*conductas que puedan dañar, en ocasiones de manera permanente e irreversible, no solo al otro cónyuge, sino a los hijos de esa unión en conflicto (...)*

*(...)Coincidimos que aunque el Estado debe ponderar la integración familiar, es preciso estar conscientes de que nuestra realidad cotidiana genera la necesidad de instituir un procedimiento de divorcio que responda a las exigencias de la sociedad actual, el cual hace posible que las parejas que dijeron unirse para convivir y tener familia opten después por separarse. Adicionamos que los juicios de divorcio necesario presentan innumerables inconvenientes, tornándose complejos, además de que constituyen una carga de extremadamente pesada para los cónyuges, ya que resultan emocionalmente traumáticos, económicamente costosos y sumamente dilatorios (...)*

*(...)Establecemos que resulta necesario eliminar las barreras y dificultades que conllevan los procedimientos y procesos actuales que deben sustanciar las parejas que desean divorciarse, por ende la figura jurídica de divorcio incausado se presenta como la opción más viable y benéfica para disolver el vínculo matrimonial, toda vez que bastará con la solicitud unilateral con la finalidad de terminar el matrimonio para que el juez lo decrete, sin necesidad de invocar o justificar causas (...)*

Del análisis de dicha exposición de motivos, se desprende que la intención principal y/o lo que se pretendía lograr con dicha reforma es que:

1. Se otorgaría celeridad y simplificación del divorcio al acotar el plazo y procedimiento para resolver.
2. Se evitarían largos y costosos procesos, en perjuicio de la economía familiar y se generaría ahorro al recortar los tiempos del procedimiento judicial.
3. Ofrecería comodidad al ser que reduciría notoriamente la cantidad de desplazamientos y trámites, otorgando un ahorro de tiempo.
4. Evitar que las causales de divorcio se empeñen en mantener a toda costa un vínculo jurídico, el cual a la postre puede ocasionar daños de manera permanente e irreversible no solo a los cónyuges sino a los hijos de éstos.



5. Que los divorcios no se tornen complejos, además de que constituyan una carga extremadamente pesada para los cónyuges, ni que resulten emocionalmente traumáticos, económicamente costosos ni dilatorios.

La realidad es que dicho proyecto de reforma pintaba para ser maravillosa y ser muy accesible para los ciudadanos a fin de que lograran su objetivo, mismo que al final se traduce en que el Estado reconozca una situación de facto que ya acontece en el contexto familiar de quien solicita de una autoridad judicial que disuelva su vínculo matrimonial.

Sin embargo, dentro de dicha reforma se contempló el artículo 1126 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León, del cual en su momento no se vieron y/o se quisieron ver los alcances que la aplicación del mismo tendría en perjuicio de la ciudadanía que se encuentra en esta situación familiar, además de que el mismo es inconstitucional. Dicho precepto legal, establece lo siguiente:

**Artículo 1126.** - *Si transcurridos treinta días naturales contados a partir de que la solicitud de divorcio incausado fue admitida y, por cualquier causa, no se ha emplazado al cónyuge del solicitante, el juez de oficio declarará sin efectos la solicitud y ordenará el archivo definitivo del expediente.*

La aplicación de ese precepto legal en la práctica, se ha vuelto un mero tormento y dolor de cabeza no solo de los ciudadanos, sino también de los abogados postulantes, y se procede a explicar las razones de ello.

En todos y cada uno de los procedimientos judiciales, existen diversas etapas que va desde la presentación y recepción de la respectiva demanda, hasta lograr obtener el dictado de la sentencia definitiva que resuelva el conflicto. Sin embargo, la etapa procesal del emplazamiento además de ser la más importante, en muchas de las ocasiones es en la que más se lleva tiempo.





Esto último por diversos factores, como puede ser que la parte actora no sepa con certeza en donde es que vive y habita el demandado, o bien que aún sabiendo donde vive no se le pueda localizar a éste por múltiples razones, o bien que incluso el demandado viva en otro Estado de la República o en otro País y para ello se tenga que girar el exhorto o la carta rogatoria correspondiente y esperar que éstos regresen debidamente diligenciados, puesto que si no es así, se tiene que volver a solicitar dichos medios de comunicación judicial y así una y otra vez hasta lograr el respectivo emplazamiento.

Ahora, para lograr los emplazamientos de los demandados que tengan su domicilio dentro del Estado, el promovente por sí mismo o a través de sus abogados autorizados tienen que gestionar un folio ante la Unidad de Medios de Comunicación del Poder Judicial del Estado, para que posteriormente el actuario acuda al domicilio que se le indicó, luego éste tiene que subir al sistema con el que cuentan internamente la respectiva diligencia actuarial, para que posteriormente -de ser el caso- el interesado aclare, modifique o insista en el domicilio de dicho demandado, esperar el respectivo acuerdo del juzgado en donde le ordene al actuario constituirse de nuevo en el mismo o nuevo domicilio que se haya mencionado, y así repetir el proceso hasta que se logre.

Por otro lado, para lograr el emplazamiento de los demandados que viven fuera del Estado, como se mencionó antes, se tiene que solicitar el respectivo exhorto o carta rogatoria (según corresponda) que el juzgado a cargo del expediente se lo entregue al promovente o sus abogados, que se mande el exhorto, que lo reciba el juzgado exhortado y que lo diligencie en tiempo, siendo que esto es muy poco probable que suceda, pues los exhortos y cartas rogatorias se diligencian conforme a las reglas procesales del Estado en donde se encuentre esto último, siendo que es muy poco



probable que sus tiempos coincidan con la carga que impone el artículo 1126 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León.

Por otro lado, en los casos en los que el demandado no haya sido localizado en el o los domicilios precisados, o bien se tenga pleno desconocimiento del lugar en donde aquél pueda habitar, previo a lograr el emplazamiento por edictos, se tienen que agotar los oficios de búsqueda y localización para saber si dicho demandado tiene algún domicilio registrado de dicho demandado, para tal efecto se giran oficios al Instituto Nacional Electoral, Agua y Drenaje, Gas Natural, Teléfonos de México, a la Fiscalía General de Justicia del Estado, etc.

Este es otro camino difícil porque aquéllas generalmente no contestan en tiempo, se tienen que solicitar oficios recordatorios y mientras ello sucede, el plazo que contempla el artículo 1126 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León se actualiza y se tiene que dar de baja el asunto como totalmente concluido, para volver a comenzar desde cero.

Para todo efecto, con todas estas dificultades que se comentaron, la realidad de las cosas es que generalmente las personas solamente tienen un intento o máximo dos para lograr emplazar al demandado dentro del plazo que contempla dicho precepto legal, cuando en una verdadera aplicación del derecho fundamental de acceso a la justicia que contempla el artículo 17 de la Constitución Federal, la parte interesada debe contar con un sin limite de oportunidades e/o intentos para poder realizarlo y sin tener un plazo fatal para tener una consecuencia adversa en caso de no lograrlo.

Lo anterior se afirma así, puesto que hay que hacer hincapié en que el precepto legal en comento establece que, si "por cualquier causa" no se ha emplazado a la persona demandada en treinta días naturales, se dejará sin efectos el procedimiento



¿Qué culpa tiene el ciudadano de que no se logre efectuar el emplazamiento si ello no depende propiamente de él y además está poniendo todo de su parte para lograr dicho objetivo? ¿Por qué dar de baja el asunto como totalmente concluido si ello le costó tiempo, esfuerzo y dinero?

Y es que, incluso cuando aún se reconocía en nuestra legislación el divorcio necesario y se tramitaban los procedimientos judiciales de esta forma, en la que se le imponía al interesado la carga de probar alguna causal de divorcio, se tenía un sin límite de oportunidades para poder lograr el emplazamiento del demandado, y además, no se tiene un plazo legal para hacerlo y mucho menos una consecuencia adversa a sus intereses, ¿Cuál es la razón por la que dentro del divorcio incausado no sea así? ¿no se supone que con la reforma lo que se buscaba era poner menos trabas y hacer más accesible el ejercicio del derecho del ciudadano? la realidad de las cosas es que este artículo no ayuda en nada al ciudadano e incluso va en contra de los principios y/o razones por los que se incorporó este procedimiento al Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León, tal como se expondrá más adelante.

Pero antes de entrar a ello, es conveniente aclarar que no se pasa por desapercibido los juzgados tienen grandes cantidades de trabajo, sobre todo cuando observamos que el índice de divorcios ha aumentado de sobremanera, pero esto no debe ser una excusa para que los asuntos de las personas, sobre todo en un tema delicado como lo es el divorcio incausado, se archiven en un término tan corto de 30 días, máxime que la mayoría de las ocasiones, las causas por las que no se logra,, no están en manos de la parte promovente.

Por lo que, es conveniente aclarar que con esto no se promueve que los procedimientos de divorcio que se inicen se queden activos por largo tiempo, sino



que lo que se promueve es que no se les aplique una consecuencia adversa a los ciudadanos si en un plazo de treinta días no logran emplazar al demandado, sobre todo cuando están impulsando constantemente (sin abandonarlo) dicho procedimiento judicial a fin de lograr culminar esa etapa del procedimiento, promover que siga viva la acción del ciudadano en que realidad quiere lograr la justicia.

Ahora bien, las razones por las que se estima que la existencia de dicho precepto legal va en contra de las razones e/o intereses por las que se incorporó y reconoció el Juicio Oral sobre Divorcio Incausado en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León, es básicamente porque:

La existencia del artículo 1126 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León:

1. No otorga celeridad ni simplificación al proceso, sino todo lo contrario. Ya que, en los procedimientos en los que no se logre realizar el debido emplazamiento de ley a la parte demandada, en el plazo que establece dicho dispositivo legal, se retrasa notoriamente y se torna complejo el hecho de que el ciudadano pueda gozar del derecho humano al libre Desarrollo de la Personalidad a través del divorcio.

Ello, ya que el ciudadano, en caso de no lograr el emplazamiento en ese lapso, tiene que volver a presentar su solicitud de divorcio y nuevamente iniciar desde cero dicho procedimiento judicial, como si la manifestación ya realizada ante la autoridad competente para ello no se hubiere realizado, lo cual es completamente inconstitucional, pues no se estaría garantizando de



manera adecuada el Derecho de Acceso a la Justicia contemplado por el artículo 17 de la Constitución Federal.

2. Además, tampoco se evitan largos y costosos procesos en perjuicio de la economía familiar, ya que como se mencionó con anterioridad, con la actualización de dicha disposición legal, los ciudadanos tienen que volver a iniciar el procedimiento hasta que sea posible emplazar a la parte demandada en dicho periodo. Lo que a la postre ocasiona que tal procedimiento se vuelva más extenso y costoso de como en principio estaba contemplado con la existencia de dicha reforma legal de mérito.

Es importante mencionar que las personas que solicitan abogados, pagan honorarios por los servicios profesionales que les son brindados, pagando a veces por adelantado y otras por avance procesal, y al darse de baja los asuntos por causas ajenas a su voluntad, se ven afectados económicamente. Agregando, además, que los abogados de oficio que se encargan de llevar estos procesos de manera gratuita para quien los solicita, dedican su tiempo a ayudar a estas personas y también se ven afectados y truncados los avances de los asuntos que tienen a su cargo ¿Qué acaso el tiempo no cuenta?

3. Asimismo, si bien es cierto que con dicha reforma se suprimió la carga procesal de las partes de acreditar la existencia de alguna casual para lograr concreter el divorcio, y en principio con eso se lograba que dichas causas dejaran de empeñarse en mantener un vínculo jurídico; lo que también es cierto es que con este precepto legal, que si bien no impone la carga de acreditar una causal para lograr obtener el divorcio, sí impone como carga procesal el que se le emplace al demandado en un periodo de 30 días naturales, algo que trae consigo un reto aún mucho más gravoso que el



acreditar una causal de divorcio; ya que en ésta por lo menos si dependía de la parte el acreditarla o no, siendo que el emplazamiento de ley propiamente no depende de la parte interesada, sino del propio Sistema del Poder Judicial del Estado de Nuevo León.

4. Finalmente, contrario a la intención de la reforma (según su exposición de motivos) la existencia del multicitado numeral, trae como consecuencia que el lograr obtener el divorcio se torne sumamente complejo, costoso y dilatorio.

Ahora, lo perjudicial de este precepto legal se puede ver en estadística pues a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, mediante la solicitud con número de folio 231420, se logró obtener la información que durante el año 2019, en el Estado de Nuevo León se iniciaron 29,672 procedimientos de divorcio incausado. Siendo que, mediante diversa solicitud de transparencia con número de folio 255220, se logró obtener la información que de dicho número de procedimientos iniciados, solo en el 48% de los asuntos se logró el dictado de una sentencia en un 48% de los asuntos (14,419) y el 43% (12,672) fueron dados de baja principalmente por este motivo, siendo que los procedimientos restantes continuaban en trámite al momento en que se rindió esa información.

Es sumamente alarmante el alto nivel de procedimientos que no llegan al dictado de una sentencia definitiva en los procedimientos de divorcio y para ello tenemos que trabajar y hacer lo necesario para que el número de procedimientos que lleguen a esa etapa sea mucho mayor que el actual, siendo esta propuesta una múltiples pasos o cosas que se tienen por hacer.

No obstante lo anterior, es de suma importancia también recalcar y hacer nota que dicho precepto legal también resulta ser inconstitucional, pues va en contra de lo



que establece el artículo 4º de la Constitución Federal, según lo ya ha interpretado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al ser que restringe injustificadamente el Derecho Humano al Libre Desarrollo de la Personalidad de los ciudadanos.

Es así porque es evidente que si la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional los artículos de los Códigos Civiles de las entidades federativas que exigían acreditar una causal para lograr obtener el divorcio, a mayoría de razón es inconstitucional cualquier precepto legal adjetivo que restrinja o limite injustificadamente el derecho humano antes mencionado a la condición de que, en un plazo de 30-treinta días naturales, contados a partir de que se haya admitido a trámite la solicitud de divorcio incausado, se le tenga que notificar a la parte demandada que el promovente estoy ejerciendo su derecho al libre desarrollo de la personalidad, a través de dicho procedimiento judicial.

Robusteciendo lo anterior, hay que señalar que es completamente inconstitucional que, injustificadamente, se limite a los ciudadanos al poder disfrutar y/o tener acceso al derecho humano del libre desarrollo de la personalidad bajo la condicionante de que tenga que hacerle del conocimiento a su todavía cónyuge, que ha iniciado el procedimiento judicial de divorcio incausado; siendo que ya existe la expresa manifestación de la voluntad de dicho ciudadano, expuesta ante la autoridad competente, de que no quiere seguir en matrimonio con esa persona.

Lo anterior, puesto que como ya se mencionó, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante la jurisprudencia 1ª/J 28/2015 ya declaró que, en cuanto al derecho humano consistente en el libre desarrollo de la personalidad, el Estado tiene prohibido interferir, siendo que únicamente debe diseñar instituciones que faciliten la persecución de esos planes de vida e ideales; siendo inconstitucional



cualquier precepto legal que, injustificadamente, le ponga límites al ejercicio de ese derecho.

Bajo este orden de ideas, es inconstitucional el artículo 1126 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León, ya que si bien es cierto que en un principio la regulación del procedimiento oral como vía para tramitar un divorcio incausado facilita el que el ciudadano tenga acceso a su derecho humano al libre desarrollo de la personalidad, lo que también es cierto es que, por otra parte, dicho procedimiento judicial y, en particular, el precepto legal en comento restringe, limita y/o condiciona que pueda tener acceso a ese derecho siempre y cuando, en un plazo de 30 días naturales contados a partir de que se admite a trámite dicho procedimiento judicial, se le haga del conocimiento a su todavía cónyuge dicho proveído judicial; ya que, de no hacerlo en ese plazo, por cualquier razón que no se haya podido llevar a cabo la notificación, se da de baja el procedimiento judicial en comento, y entonces el ciudadano no puede tener acceso a su derecho humano al libre desarrollo de la personalidad, cuando lo cierto es que dicha limitante o condicionante no tiene justificación legal alguna para suprimir ese derecho.

Es así que la presente iniciativa tiene como objetivo, el que se le brinde de manera completa el derecho del libre desarrollo a las personas que ya no tienen intención de seguir en vida conyugal, que exista una celeridad en el procedimiento de divorcio, y no por el contrario, hacer tedioso y largo el trámite.

El desempeño ajeno no debe trasgredir mi libre desarrollo. Todos somos libres de vivir nuestro estado civil conforme a nuestra voluntad.

Por los argumentos ya descritos, me permito someter a la consideración de éste pleno el siguiente proyecto de:





H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN  
LXXV LEGISLATURA  
MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL

**morena**  
La esperanza de México

## DECRETO

**ÚNICO.** - Se reforma por adición el artículo 1126 del CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, para quedar como sigue:

Artículo 1126.- Si transcurridos treinta días naturales contados a partir de que la solicitud de divorcio incausado fue admitida y, por cualquier causa **la parte interesada no ha realizado alguna gestión tendiente a llevar a cabo el emplazamiento**, el juez de oficio declarará sin efectos la solicitud y ordenará el archivo definitivo del expediente.

## TRANSITORIOS.

**PRIMERO.** - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Atentamente



C. DIP. BEATRIZ DE LOS SANTOS ELIZONDO



H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN  
LXXV LEGISLATURA

OFICIALÍA MAYOR

Oficio Núm. OM 2489/LXXV  
Expediente Núm. 13637/LXXV

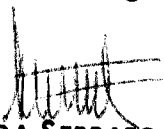
**C. DIP. DELFINA BEATRIZ DE LOS SANTOS ELIZONDO**  
**INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO MOVIMIENTO**  
**DE REGENERACIÓN NACIONAL DE LA LXXV LEGISLATURA**  
**PRESENTE. -**

Con relación a su escrito, mediante el cual presenta iniciativa de reforma al Artículo 1126 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León, me permito manifestarle que el C. Presidente de la Diputación Permanente del H. Congreso del Estado de Nuevo León, conoció de su escrito dictando el siguiente acuerdo:

**"Trámite: De enterado y de acuerdo con lo establecido en los artículos 24 fracción III y 39 fracción III del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, se turna a la Comisión de Legislación, la cual es presidida por el C. Dip. Félix Rocha Esquivel"**

Reitero a Usted mi consideración y respeto.

ATENTAMENTE  
Monterrey, N.L., a 5 de agosto de 2020

  
**MTRA. ARMIDA SERRATO FLORES**  
**OFICIAL MAYOR DEL H. CONGRESO DEL ESTADO**  
**DE NUEVO LEÓN**

c.c.p. archivo

*Recibido  
Cathy  
6/Agosto/2020  
14:32 hrs*